



REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO DIECISÉIS ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN
Diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

REFERENCIA

EXPEDIENTE No. 05001-33-33-015-2024-00325-00

ACCIÓN DE TUTELA

ACCIONANTE: FERNANDO PEÑA ROMERO.

ACCIONADO: ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA.

VINCULADOS: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, UNIÓN TEMPORAL IX CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL 2019 y a los discentes del "IX CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL INICIAL PARA LOS ASPIRANTES A LOS CARGOS DE MAGISTRADOS Y JUECES DE TODAS LAS ESPECIALIDADES"

AUTO INTERLOCUTORIO

ASUNTO: ACEPTA IMPEDIMENTO/AVOCA CONOCIMIENTO/ ADMITE ACCIÓN DE TUTELA/ NIEGA MEDIDA PROVISIONAL.

La Juez Quince Administrativa Oral del Circuito de Medellín, doctora **LAURA GONZÁLEZ LONDOÑO**, mediante providencia del dieciocho (18) de noviembre de 2024, se declaró impedida para conocer del trámite de la presente acción constitucional, por considerar que en ella recaía la causal de recusación contemplada en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, dado que en el asunto que motivó la interposición de la presente tutela, funge como discente en el «IX Curso de Formación Judicial inicial para Jueces y Magistrados» dictado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

Al reflexionar sobre la causal invocada, se tiene lo siguiente:

Dispone el artículo 141 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012 – en su numeral 9, lo siguiente:

"Artículo 141. – Son causales de recusación las siguientes (...)

1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.

(...)"

Como lo ha señalado de manera reiterada la jurisprudencia nacional, las causales de impedimento en nuestro sistema procesal, ostentan entre otras, la característica de ser taxativas y por ende, su interpretación debe ser restrictiva, en tanto constituyen circunstancias que llevan a la separación de un funcionario judicial del conocimiento de un asunto determinado, en contraposición al principio general, conforme al cual, la competencia está asignada desde la misma ley, con base en premisas de orden general y abstracto, precisamente para salvaguardar los principios de independencia e imparcialidad que deben guiar la función jurisdiccional.

En orden a lo anterior, las causales de impedimento no pueden extenderse o ampliarse a criterio del juez o de las partes, por tanto, su escogencia no corresponde a un asunto discrecional.

Respecto al sentido y alcance de la causal de impedimento derivada de “Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, **interés directo o indirecto en el proceso**”, la Corte Constitucional en Sentencia C – 496 de 2016, con ponencia de la magistrada MARÍA VICTORIA CALLE CORREA, razonó:

“Sobre la imparcialidad, ha señalado que esta “se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial”.

*Dentro de este contexto, la jurisprudencia constitucional le ha reconocido a la noción de imparcialidad, una doble dimensión: (i) **subjetiva, esto es, relacionada con “la probidad y la independencia del juez, de manera que éste no se incline intencionadamente para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos procesales, o hacia uno de los aspectos en debate, debiendo declararse impedido, o ser recusado, si se encuentra dentro de cualquiera de las causales previstas al efecto”**; y (ii) una dimensión objetiva, “esto es, sin contacto anterior con el thema decidendi, “de modo que se ofrezcan las garantías suficientes, desde un punto de vista funcional y orgánico, para excluir cualquier duda razonable al respecto”*. No se pone con ella en duda la “rectitud personal de los Jueces que lleven a cabo la instrucción” sino atender al hecho natural y obvio de que la instrucción del proceso genera en el funcionario que lo adelante, una afectación de ánimo, por lo cual no es garantista para el inculcado que sea éste mismo quien lo juzgue”.

Igualmente, sobre el interés directo o indirecto como causal de impedimento, que puede afectar la imparcialidad del juzgador, ha expresado la Corte Constitucional, citando al máximo tribunal de lo contencioso administrativo:

“Así mismo, el Consejo de Estado estableció que el interés en el proceso puede ser: i) directo cuando los efectos de la sentencia cobijan personalmente al juez; o, ii) indirecto, en el evento en que la sentencia definitiva proferida en el proceso de conocimiento del juez, puede servir de precedente jurisprudencial –favorable o desfavorable–, para futuras demandas^[11], lo que le representa un beneficio o utilidad mediata^[12]. De igual manera, esa Corporación ha considerado que la configuración de la causal en cita requiere que se trate de un interés particular, personal, cierto y actual, que permita una relación, al menos mediata, con el caso objeto de juzgamiento y genere la imposibilidad de una decisión imparcial^[13].”¹

Ahora, revisado el asunto en debate, la Juez Quince Administrativa Oral de Medellín, doctora LAURA GONZÁLEZ LONDOÑO asegura que funge como discente en el «IX Curso de Formación Judicial inicial para Jueces y Magistrados» dictado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en contra de quien se acciona en el presente trámite constitucional y se observa que en el trámite constitucional se ventilan aspectos atinentes al curso de formación en mención, por lo cual, de

¹ Corte Constitucional, Auto 073 de 2020 Magistrada Sustanciadora: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

continuar el estudio de la tutela por la funcionaria judicial se podría ver afectada su imparcialidad, dado el interés que le puede asistir en el asunto, lo que lleva concluir que la circunstancia alegada es suficiente es el Despacho, para entender que encuadra dentro de la causal invocada.

En conclusión, lo anterior constituye razón suficiente para tener por fundado el impedimento propuesto por la doctora **LAURA GONZÁLEZ LONDOÑO**, lo que obliga a esta judicatura, a avocar el conocimiento del presente asunto.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, se **admite** la acción de tutela instaurada por el señor **FERNANDO PEÑA ROMERO**, en contra de la **ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA**, en la cual solicita el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a cargos públicos, entre otros.

De otra parte, de conformidad con los hechos planteados por el accionante a través del escrito de tutela, se hace necesario **VINCULAR** al **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**, a la **UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, UNIÓN TEMPORAL IX CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL 2019** y a los discentes del “**IX Curso de Formación Judicial Inicial para los aspirantes a los cargos de Magistrados y Jueces de todas las especialidades**” estos últimos a través de la **ESCUELA RODRIGO LARA BONILLA**.

Se ordena a la **ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA**, que dentro de las dos (2) horas siguientes a la notificación de esta providencia, publique en el portal web, utilizado para publicar y notificar las distintas actuaciones relacionadas con el “**IX Curso de Formación Judicial Inicial para los aspirantes a los cargos de Magistrados y Jueces**” el presente auto admisorio, al igual que el escrito de tutela y sus anexos, publicación que hará las veces de notificación de la presente providencia a los discentes cuya vinculación se acaba de ordenar, en orden a garantizar su eventual intervención. Se deberá acreditar ante el Despacho, por la **ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA**, la realización de dicha publicación, dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación de la presente providencia.

Ahora bien, el accionante solicita como medida provisional, que se ordene a la entidad accionada que:

“Se DISPONGA MI INCLUSIÓN PROVISIONAL EN LA SUBFASE ESPECIALIZADA del curso concurso de formación judicial (IX curso de formación judicial) a cargo de la accionada, hasta que usted resuelva la presente acción constitucional. Medida que solicito, dado que mediante la Resolución N. EJR24-591, contra la cual no procede recurso alguno, la entidad accionada me categorizó como “REPROBADO” de la subfase general, otorgándome un puntaje de 786 —el mínimo exigido es de 800—. Ello implica que, producto de tal decisión quedo fuera del concurso de méritos y no puedo avanzar a la subfase especializada que inició el pasado 16 de noviembre de 2024.”

En orden a resolver la medida provisional solicitada, se tiene lo siguiente:

El artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, dispone el trámite para el trámite de las medidas provisionales señalando que:

“ARTÍCULO 7°. MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER UN DERECHO. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante.

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.

*El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho **o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso.***

El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado” (Negritas fuera del texto original)

Acorde con lo anterior, encuentra este despacho que la accionada a través de la Resolución No. EJR24-591, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto de calificación de la fase general.

La Resolución No. EJR24-59, fue notificada al accionante el pasado ocho (8) de noviembre de 2024, en el que se reconsideró parcialmente la decisión, sin embargo, el puntaje obtenido fue de 786 puntos, y teniendo en cuenta que el puntaje mínimo aprobatorio es de 800 puntos, conservó la condición de reprobado.

Ahora, el IX Curso de Formación Judicial está diseñado para funcionar de manera virtual, a través de conectividad asincrónica, conforme a la cual, los discentes deben cumplir con un mínimo de horas de conexión a la plataforma, por cada unidad que conforma el plan de formación, cuya programación en lo que comprende al año 2024, abarca hasta el diecinueve (19) de diciembre.

La razón de ser de la medida provisional al interior del trámite de las acciones de tutela, además de evitar que la decisión final sea meramente ilusoria, es prevenir el agravamiento de la amenaza o vulneración para el derecho o derechos fundamentales comprometidos, de forma tal, que el instrumento judicial cumpla su razón de ser, esto es, garantizar la intangibilidad y supremacía de este género de derechos al interior del ordenamiento jurídico, por tanto, en aquellos eventos en los

cuales no se vislumbra que el postergar la implementación de las acciones y/o medidas encaminadas a la salvaguarda de los derechos presuntamente afectados, para el momento de la sentencia, conlleve a un mayor detrimento de estos, en lo que el Decreto 2591 de 1991 denomina perjuicio irremediable, la medida provisional deviene en innecesaria.

En ese orden de ideas, en el asunto en estudio, no se advierte que esperar el término con que cuenta el Despacho para resolver la primera instancia en la acción de tutela, le pueda causar un perjuicio irremediable o irreparable al accionante o agravar en forma desproporcionada, el que ya viene padeciendo, razón por la cual, se denegará la medida provisional solicitada.

En consecuencia, se ordenará la notificación de la presente providencia a la accionada y a los vinculados por el medio más expedito posible requiriéndoseles para que rindan un informe detallado sobre los hechos que sustentan la acción, aportando todos los elementos probatorios y los antecedentes del asunto, en el término de **DOS (2) DÍAS**, so pena de tener por ciertos los hechos en que se fundamenta la presente acción y resolver de plano.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO DIECISÉIS ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE

PRIMERO. Declarar fundado el impedimento propuesto por la doctora **LAURA GONZÁLEZ LONDOÑO**, Juez Quince Administrativa Oral del Circuito de Medellín, para conocer de la presente acción de tutela, conforme lo expuesto en los considerandos de esta providencia.

SEGUNDO. AVOCAR conocimiento de la presente acción de tutela, interpuesta por el señor **FERNANDO PEÑA ROMERO** en contra de la **ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA**.

TERCERO. ADMITIR la acción de tutela instaurada por el señor **FERNANDO PEÑA ROMERO**, en contra de la **ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA**.

CUARTO. VINCULAR al presente trámite al **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**, a la **UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, UNIÓN TEMPORAL IX CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL 2019** y a los discentes del “IX Curso de Formación Judicial Inicial para los aspirantes a los cargos de Magistrados y Jueces de todas las especialidades” estos últimos a través de la **ESCUELA RODRIGO LARA BONILLA**.

QUINTO. Se ordena a la **ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA**, que dentro de las dos (2) horas siguientes a la notificación de esta providencia, publique en el

portal web, utilizado para publicar y notificar las distintas actuaciones relacionadas con el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para los aspirantes a los cargos de Magistrados y Jueces” el presente auto admisorio, al igual que el escrito de tutela y sus anexos, publicación que hará las veces de notificación de la presente providencia a los discentes cuya vinculación se acaba de ordenar, con miras a garantizar su eventual intervención. Se deberá acreditar ante el Despacho, por la **ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA**, la realización de dicha publicación, dentro de los dos (2) días siguientes.

SEXTO. NIEGUESE la medida provisional solicitada por el accionante, conforme lo expuesto en los considerandos de esta providencia.

SÉPTIMO. Notifíquese a la **ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA**, al **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**, a la **UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, UNIÓN TEMPORAL IX CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL 2019** por el medio más expedito posible requiriéndosele para que rinda un informe detallado sobre los hechos que sustentan la acción, aportando todos los elementos probatorios y los antecedentes del asunto, en el término de **DOS (2) DÍAS**, so pena de tener por ciertos los hechos en que se fundamenta la presente acción y resolver de plano.

OCTAVO. Comuníquese la presente decisión a la Juez Quince Administrativa Oral del Circuito de Medellín, para los fines pertinentes.

NOTIFÍQUESE



RODRIGO VERGARA CORTES
Juez
Firma escaneada

CORREOS	
ACCIONANTE	ferpena071@gmail.com;
ACCIONADA	escujud@cendoj.ramajudicial.gov.co; convocatoria27@cendoj.ramajudicial.gov.co;
UNION TEMPORAL FORMACION JUDICIAL	soporte@ixcursoformacionjudicial.com; ixcursoformacionji@cendoj.ramajudicial.gov.co; meejrlb@cendoj.ramajudicial.gov.co;
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL	carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co;
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	desajbtanotif@cendoj.ramajudicial.gov.co; dsajmdlnotif@cendoj.ramajudicial.gov.co;
JUZGADO 15 ADMINISTRATIVO	adm15med@cendoj.ramajudicial.gov.co;

AVISO IMPORTANTE: La dirección de correo electrónico jadmin16mdl@notificacionesrj.gov.co es de uso único y exclusivo de envío de notificaciones, los mensajes que se reciban en este buzón electrónico no serán tenidos en cuenta. Apreciado usuario si tiene alguna solicitud por favor comuníquese a la siguiente línea telefónica: 2 61 66 88 o envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: adm16med@cendoj.ramajudicial.gov.co